

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 29º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2560-2020
CARATULADO : PATRICIO LIOI Y COMPAÑIA LIMITADA/
FISCO DE CHILE-CDE

Santiago, diez de Junio de dos mil veintidós

VISTOS:

Alejandro Rivas Humeres, abogado, domiciliado en avda. Andrés Bello N° 2711, oficina 800, Las Condes, en representación de Patricio Lioi y Cía. Ltda, sociedad dedicada la fabricación de productos elaborados de metal, representada legalmente por María del Pilar Lioi Coterá, ingeniera comercial, con domicilio en calle Santa Marta N° 2100, Maipú, deduce reclamación judicial de multa en contra de la Secretaría Regional Ministerial, Región Metropolitana, representada por Rosa Oyarce Suazo, órgano del Estado representado por el Consejo de Defensa del Estado, y éste, a su vez, por su Presidente, Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos con domicilio en Agustinas N° 1687, Santiago.

Expone que su reclamación se deduce en contra de la Resolución Exenta N° 455, de fecha 22 de enero de 2020, emitida por la reclamada, de la que su parte fue notificada con fecha 3 de febrero de 2020, en virtud de la cual se le aplicó una multa de 400 UTM. La sanción cursada por la autoridad reclamada se origina en las acta de fiscalización de fecha 13 de febrero de 2019, N° 178477, 178478 y 178479, por el accidente laboral fatal que afectó a Carlos Enrique Díaz Muñoz. Señala que en la investigación se habría concluido que las sumariadas, Patricio Lioi y Cía. Limitada y la empresa Ismael Antonio Díaz Muñoz, no lograron desvirtuar los cargos formulados para eximirse de la responsabilidad que les cabe en los hechos, toda vez que fueron constatados y consignados en el acta por el funcionario fiscalizador en la visita inspectiva y constituyen infracción a la normativa sanitaria vigente, especialmente al Decreto Supremo N° 594/99. Así, habrían infringido las disposiciones de los artículos 3, 36, 37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 594/99 del Ministerio de Salud, y los artículos



«RIT»

Foja: 1

21, 22, 23 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, aprobado por el Decreto Supremo N° 40/69 del Ministerio del Trabajo. Explica que por ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 161 al 174 del Código Sanitario, los preceptos de la Ley N° 19.880 y en uso de las facultades entregadas por el Decreto Fuerza de Ley 1/05, se condenó al pago de multa.

Señala que la reclamación se funda en el hecho que la sanción recurrida ya ha sido materia de sanción anterior por parte de la autoridad competente, que ha prevenido en el conocimiento y sanción de tales hechos.

Indica que, efectivamente, el día 13 de febrero de 2019, aproximadamente a las 16:30 hrs, mientras los trabajadores de la empresa contratista Ismael Antonio Díaz Muñoz ejecutaban labores para desarmar un ventilador eólico y una escala, en altura aproximada de 4,5 metros, el trabajador individualizado como Carlos Díaz Muñoz habría -mientras descendía- habría dado un paso que, a su vez, habría fracturado una placa de pizarreño, lo que habría provocado su caída. Al ser auxiliado por el paramédico de la empresa, se constata que no posee signos vitales y que había fallecido en el lugar.

Añade que mediante Resolución de Multa N° 8415/19/3 de fecha 26 de febrero de 2019, la Dirección del Trabajo sancionó a la Empresa Patricio Lioi y Compañía Limitada por el hecho descrito, que derivó en el fallecimiento de Carlos Díaz Muñoz. El razonamiento efectuado por la autoridad laboral y que fundamenta la multa es el siguiente: "No vigilar como empresa principal el cumplimiento que le corresponde a las empresas contratistas y subcontratistas, en cuanto a la obligación de informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán, las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y los métodos de trabajo correctos y la entrega y uso correcto de los elementos y equipos de protección, según el siguiente detalle: empresa contratista Ismael Díaz Muñoz, realizaba mantención en techumbre de ex galpón de cromado a la hora del accidente. Trabajador fallecido producto de la caída de unos 5 mts. aproximadamente". Plantea que la Dirección del Trabajo establece que la normativa infringida en el presente caso por su representada sería los artículos 9° número 3 del Decreto Supremo N° 76 del 18 de enero de 2007 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en relación con el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, y también los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo.

Añade que con fecha 21 de abril de 2019, Patricio Lioi Compañía Limitada firmó una transacción con Romina Andrea Díaz Cabeza, Carla del Pilar Díaz Cabeza, Marta Graciela Díaz Cabeza, Francisca Catalina Díaz Cabeza y Marisol



«RIT»

Foja: 1

Patricia Díaz Cabeza, herederas (hijas) del trabajador fallecido, poniendo fin a cualquier litigio pendiente y eventual derivado del accidente, acuerdo que consideró el pago de \$95.000.000 a favor de estas personas, en el que se deja de manera expresa -en su cláusula segunda- que el accidente ocurrió por circunstancias no imputables a Patricio Lioi Compañía Limitada ni de las compañías o sociedades relacionadas.

Aduce que se habría infringido el principio *non bis in ídem*, que se encontraría recogido en la legislación y sería aplicable en este caso, especialmente en el Código del Trabajo, en su artículo 191, cuando señala que: *“Cada vez que uno de los servicios facultados para fiscalizar la aplicación de normas de higiene y seguridad, se constituya en visita inspectiva en un centro, obra o puesto de trabajo, los demás servicios deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias que están siendo fiscalizadas, en tanto no se haya dado término al respectivo procedimiento”*. Esta norma sería clausura para la autoridad: no pueden existir dos procesos iniciados con el mismo fundamento, en este caso prevención y seguridad, que tengan como objetivo revisar la materia, si ya existe otro organismo conociendo de éstos.

Refiere que la situación producida obedecería a la aplicación de dos sanciones, por autoridades distintas, en dos procesos investigativos separados, pero que tienen como fundamento la ocurrencia del mismo hecho y, además, la misma justificación jurídica. En lo pertinente, que la Dirección del Trabajo, en la Resolución de Multa N° 8415/19/3 sanciona a su representado por no haber ejercido sus potestades de vigilancia como empresa principal ante la empresa contratista. Lo anterior constituiría una infracción de la normativa de higiene y seguridad, que la misma Dirección enmarca en “Medidas de Seguridad y Prevención en el Trabajo”. Si la autoridad no cursó otra infracción a la empresa en el presente caso, es porque mediante la circular N° 23 de 26 de octubre de 2011, la propia Dirección del Trabajo reconoce la aplicación del principio *non bis in ídem*, en su vertiente material, señalando: *“En efecto, cuando un hecho involucre a más de una infracción, se deberá seleccionar la sanción del hecho infraccional que subsuma a las otras infracciones de una misma materia. En general, se debiera elegir la sanción del hecho infraccional de mayor gravedad”*. Entiende que en el caso concreto toda infracción cometida por la empresa y que tenga como fundamento la violación de la normativa de prevención y seguridad que se encuentra obligada a observar se encuentra subsumida en la multa cursada por la autoridad laboral, que castiga, en general, utilizando el tipificador de infracciones



«RIT»

Foja: 1

de la Dirección del Trabajo, que contiene, de manera íntegra, toda otra infracción cometida en el caso por su representado.

Respecto de la resolución que emana de la autoridad sanitaria, indica que en su parte considerativa establece que el fundamento de la infracción cursada es, independiente de que el trabajador haya mantenido contrato vigente con otra empresa, su calidad de empresa principal, en virtud de la cual *“deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia”*.

Señala que se cumplen los presupuestos que la doctrina habría determinado para verificar que existe una infracción del principio *non bis in ídem*: a) Identidad del sujeto: ambas infracciones son cursadas a Patricio Lioi y Cía Limitada e implicó la constitución de las autoridades en el mismo domicilio; b) identidad del hecho: ambas multas derivan de procedimientos de fiscalización en el uso de potestades discrecionales de la autoridad, que tienen como fundamento los hechos acaecidos el 13 de febrero de 2019; c) igual fundamento punitivo: la infracción cursada por ambas autoridades tiene como argumento, por una parte, no haber cumplido las obligaciones como empresa principal de manera correcta, en cuanto a la vigilancia de la normativa de seguridad y resguardo de los trabajadores, como también por no haber tomado las medidas necesarias para asegurar tales conductas. Señala que si bien parecen símiles las afirmaciones anteriores, no lo son: el primer argumento se basa en que la empresa debe vigilar el correcto funcionamiento de la normativa, es decir, revisar las materias de seguridad desde un ámbito subsidiario, toda vez que la obligación principal recaería en la empresa contratista, y el segundo argumento haría alusión a que, en caso que se detecte el no cumplimiento de las obligaciones, se deberá tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal en la obra, es decir, actuar ante un incumplimiento de la contratista, de manera subsidiaria a su deber principal de cuidado de sus propios trabajadores.

Indica que ambas autoridades se refieren a la primera facultad, no ejercida de manera correcta, según los procesos de fiscalización llevados a cabo de manera paralela, pero que en el caso de la autoridad sanitaria agrega que existe la obligación de, independiente del origen del trabajador, proporcionar la seguridad del personal. Ambas razones constituyen –a su juicio- el mismo argumento jurídico para establecer que el rol de una empresa principal será el de supervigilar y actuar en caso de ser necesario, dar cumplimiento a toda normativa de seguridad para que el personal del lugar, independiente de su origen, se encuentre resguardado.



«RIT»

Foja: 1

En conclusión, se trataría en ambos casos de establecer la infracción de la normativa de seguridad.

Cita jurisprudencia y pide que subsidiariamente, para el caso en que no se deje sin efecto la multa de 400 UTM, se la rebaje. Sostiene que el cálculo del monto sería arbitrario, carente de razón y proporción. Se requiere ante tal desmedido uso de la potestad sancionadora, una rebaja con un criterio de proporción y justicia, en que su representada no posea una multa más onerosa que la empresa en que el trabajador efectivamente ejercía funciones. Añade que la empresa contratista, es decir, con la que el trabajador fallecido poseía una relación directa y contrato laboral vigente, había firmado, una vez celebrado el instrumento que los ligaba jurídicamente, la recepción y compromiso de cumplimiento del denominado "Reglamento Especial para Contratistas", que además de tener como objetivo dar cumplimiento a las obligaciones legales, apuntaba a asegurar como empresa mandante que sean reforzadas las obligaciones normativas a través de pactos convencionales entre las partes, para que se respete y se proteja todo derecho fundamental por parte de la empresa contratista.

Agrega que el fiscalizador debe señalar los fundamentos por los que decide aplicar un monto determinado. Se debe apreciar si concurren circunstancias atenuantes y agravantes. Para ello se debió considerar que la empresa, además, para evitar cualquier litigio eventual derivado del accidente, como ya se señaló, firmó una transacción con las herederas del trabajador fallecido, cuestión que debería ser tomada en consideración al momento de graduar la responsabilidad, diligencia y medios tomados por la empresa para reparar todo daño derivado del accidente. Además, que existió una cooperación con la fiscalización, pues la empresa tuvo la mayor disposición, tanto al diálogo con la autoridad fiscalizadora, como a la exhibición de documentos solicitada por ésta, ayudando y respondiendo las dudas y consultas, además de entregar la declaración de todas las personas que fueron testigos de los hechos acaecidos.

Pide se deje sin efecto la multa aplicada, revocándose así la decisión de la autoridad sanitaria y, en subsidio, se rebaje la multa al mínimo, teniendo en consideración la infracción ya cursada por autoridad administrativa competente, con costas.

Con fecha 8 de octubre de 2020 se notifica el reclamo.

Con fecha 6 de noviembre de 2020 se realiza la audiencia de contestación y conciliación.



«RIT»

Foja: 1

La parte reclamante ratifica el reclamo.

La parte reclamada contesta mediante minuta escrita, solicitando rechazar la reclamación, con costas.

Sostiene que según acta de inspección de fojas 1 a 6 del sumario sanitario, funcionarios fiscalizadores del Departamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Salud, se constituyeron en visita inspectiva en una industria metalúrgica, ubicada en Los Yacimientos N° 561, comuna de Maipú, de propiedad de Patricio Lioi y Cia Limitada, en atención a un accidente laboral fatal que afectó a Carlos Enrique Díaz Muñoz, perteneciente a la empresa contratista Ismael Antonio Diaz Muñoz, la cual prestaba servicios de restauración del galpón de la Ex Planta Cromados, según Orden de Compra N° 121144, tenida a la vista. Se consignó en el acta, por los funcionarios fiscalizadores, que dicho accidente del trabajo ocurrió el día 13 de febrero de 2019 a las 16:30 horas, aproximadamente, en circunstancias en que los trabajadores de la contratista se suben al techo del galpón para desarmar una escala y ventilador eólico, disponiendo placas sobre el techo como superficie de trabajo. En esos momentos, el trabajador accidentado que se encontraba en el nivel de piso, sube a la cubierta y al descender de ésta pisa fuera de la placa en un pizarreño de la cubierta, fracturándose y provocando su caída al piso desde una altura aproximada de 4,50 mts. Tras el accidente es auxiliado por el paramédico de la empresa, quien le practica reanimación, constatando que el trabajador no cuenta con signos vitales, falleciendo en el lugar. La empresa mandante suspendió la tarea de desarme de escalera y extractor eólico ubicados en la techumbre del galpón de la ex Planta Cromados, y la empresa empleadora notificó la ocurrencia del accidente de forma inmediata, acatando lo establecido en la Resolución Exenta N° 156/18 del Ministerio del Trabajo.

Agrega que de la misma forma, los funcionarios fiscalizadores señalaron en el acta inspectiva que la Inspección del Trabajo no se ha hecho presente en la empresa con motivo del accidente y, además, que de la investigación realizada se detectaron las siguientes deficiencias en seguridad industrial al momento del accidente: i) no se efectuó el análisis de trabajo seguro de la tarea ejecutada al momento del accidente, verificando las condiciones del lugar de trabajo a intervenir, medidas de seguridad necesarias para ejecutarla en forma segura; ii) inexistencia de puntos de anclaje en el área de ejecución de la tarea el día del accidente, debido a que se exponía a riesgo de caída de altura; iii) falta de control por parte de las líneas de supervisión de ambas empresas de las labores asignadas al trabajador, puesto que de acuerdo a lo informado, se encontraban



«RIT»

Foja: 1

solos al momento de ocurrir el accidente; iv) no contaban con procedimiento de trabajo seguro específico para la tarea de desarme de galpón, incluyendo labores a ejecutar en altura; v) no se acreditó examen de altura física del trabajador accidentado, que indicara que se encontraba apto para ejecutar trabajos en altura; vi) no cuenta con señalética de seguridad que indique riesgo de caída de altura, obligatoriedad de uso de elementos de protección personal anticaídas, en el área de escalera de acceso a la techumbre; vii) no cuenta con capacitación teórica y práctica en el uso de sistema personal de detección de caídas (SPDC), según guía N° 3 del Instituto de Salud Pública; viii) no acreditó capacitación del trabajador fallecido en el procedimiento descrito en el punto N° 4; ix) trabajador fallecido no contaba con doble cola de vida para realizar el ascenso por la escalera de acceso a la techumbre; y, x) escalera vertical fija empleada para acceder a la techumbre no cuenta con jaula de seguridad para evitar el riesgo de caída de altura durante el ascenso.

Indica que con fecha 22 de enero de 2020 la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, Rosa Oyarce Suazo, dictó la Resolución Exenta N° 455, equivalente a la sentencia dictada en el sumario sanitario, por la que se aplicó a la reclamante una multa de 400 UTM, por constituir los hechos una infracción a lo dispuesto en los artículos 3, 36, 37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por DS. 594 de 1.999 del Minsal y de los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, aprobado por DS. 40/69 del Ministerio de Trabajo.

En la especie, esgrime que no concurre la triple identidad que configura el principio *non bis in ídem*, cuya contravención alega el reclamante, puesto que a pesar de que ambas sanciones administrativas pecuniarias han sido impuestas por autoridades distintas, a la misma persona y con motivo de un mismo hecho, obedecen a un fundamento normativo y sustantivo diverso, de acuerdo a sus propias facultades y competencias, por lo cual no se configuran los presupuestos para la aplicación del principio, por faltar el requisito de la identidad entre el fundamento de la sanción cuestionada y el fundamento de la sanción impuesta por la autoridad laboral.

Explica que la autoridad sanitaria decidió sancionar a la empresa reclamante debido a que, tal como consta en el acta de fiscalización y en la resolución sancionatoria, no se encontraban presentes las condiciones de seguridad referidas previamente. Entonces, la autoridad sanitaria multó porque el trabajador accidentado no contaba con elementos de protección personal para



«RIT»

Foja: 1

realizar trabajos en altura, careciendo de capacitación en procedimiento de trabajo seguro específico para la área de desarme de galpón, incluyendo labores a ejecutar en altura, y porque la empresa no contaba con capacitación teórico practica en el uso de un sistema personal de detección de caídas, según guía N° 3 del Instituto de Salud Pública, enfatizando que según los hechos infraccionales, tampoco había un protocolo para labores de esa naturaleza, hechos que, según concluyó, transgreden lo estatuido en los artículos 3, 37 y 53 del Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, y los artículos 21, 22, y 23 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, aprobado por DS 40/69 del Ministerio del Trabajo.

Añade que, a su vez, la Dirección del Trabajo multó a la empresa por haber incurrido en las siguientes infracciones, según Resolución de Multa N° 8415/19/3 de 26 de Febrero de 2019: “no vigilar la empresa principal el cumplimiento que corresponde a las empresas contratistas y subcontratistas sobre las medidas de seguridad y prevención en el trabajo”, con infracción del artículo 9 N° 3 del DS. N° 76 de 18 de enero de 2007 del Ministerio del Trabajo ,en relación con el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 y los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo.

En este contexto, reitera que si bien ambas sanciones administrativas pecuniarias han sido impuestas por autoridades distintas, a la misma persona y con motivo de un mismo hecho, obedecen a un fundamento normativo y sustantivo diverso, de acuerdo a las propias facultades y competencias de cada entidad administrativa, por lo que la circunstancia de que la empresa reclamante haya sido sancionada por la Dirección del Trabajo no obsta a que la autoridad sanitaria ejerza sus propias atribuciones al aplicarle una sanción. La potestad de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana para aplicar a la reclamante una multa de 400 Unidades Tributarias Mensuales, contenida en la Resolución Exenta N° 455 de 22 de enero de 2020, emana de los artículos 3, 67, 68, 82 y 174 del Código Sanitario, que la facultan para atender las materias relacionadas con las condiciones de saneamiento y seguridad de, entre otros sitios, los lugares de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza de ellos, disponiendo la última que la infracción al Código Sanitario, sus Reglamentos o las resoluciones que dicte la autoridad sanitaria será sancionada con multa de un décimo de Unidad Tributaria Mensual hasta mil Unidades Tributarias Mensuales.

En consecuencia, señala que sería evidente que ambas autoridades han intervenido en el caso en examen en ejercicio de sus atribuciones propias y en defensa de distintos bienes jurídicos, lo que permitiría descartar de plano la



«RIT»

Foja: 1

conurrencia en la especie de una infracción al invocado principio *non bis in ídem*, conclusión que, por lo demás, se vería reforzada por lo establecido en el inciso cuarto del artículo 184 del Código del Trabajo, en cuanto prescribe que: *“Corresponderá también a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el artículo 191, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las leyes que los rigen”*.

Luego, afirma que la resolución impugnada se encuentra perfectamente fundada, por lo que no es arbitraria ni existe infracción del artículo 42 de la Ley N° 19.880, lo que se desprendería de su propia lectura. Además, que la resolución impugnada es perfectamente racional, dado que no solo cita los fundamentos legales de su resolución, sino que también explica claramente, en sus considerandos, como se habrían vulnerado dichas normas, por lo que la reclamación en este punto carecería de todo fundamento. Y, por otro lado, que la sanción sería proporcional a la gravedad de la infracción cometida, atendido las falencias en que incurrió la reclamante, tal como se describen en la resolución recurrida, y que uno de los trabajadores resultó fallecido a consecuencia de tales infracciones. En este contexto, la autoridad sanitaria sí está facultada legalmente en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del Código Sanitario, para imponer multas entre un décimo de Unidad Tributaria Mensual hasta mil Unidades Tributarias Mensuales, entre otras sanciones de carácter sanitario.

Concluye que la reclamación deberá ser desechada en todas sus partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, pues no existe vicio de ilegalidad que afecte al procedimiento sancionatorio aplicado a la reclamada, encontrándose la sentencia dictada en el sumario sanitario en comento ajustada a los procedimientos previstos para reprimir infracciones reglamentarias, como sería el caso de autos.

Finalmente, sostiene que el Tribunal no puede rebajar la multa conforme al texto expreso de las normas contenidas en los artículos 170, 171 y 172 del Código Sanitario, que otorgan competencia al juez ordinario civil exclusivamente para conocer de la reclamación, en un contencioso administrativo especial, en contra de la sentencia que aplica una sanción administrativa. Dicha competencia, además, permite a la judicatura ordinaria únicamente dejar sin efecto o suspender la sanción, pero de ninguna forma modificarla o fijar una sanción distinta de la aplicada por la autoridad sanitaria, lo cual sería de toda lógica en nuestro sistema jurídico, por cuanto no corresponde en ningún caso al juez ordinario erigirse en administrador y con ello atropellar las competencias de esa función del Estado.



«RIT»

Foja: 1

Luego se llama a las partes a conciliación, sin éxito.

Posteriormente se recibe la causa a prueba.

Con fecha 9 de junio de 2022 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.EN CUANTO A LAS TACHAS.

PRIMERO: Que la parte reclamada alega la inhabilidad relativa de los testigos presentados por la reclamante, Camilo Ignacio Ugarte Gómez y Alberto Luis Verdi Manetti, por las causales contempladas en los numerales cuarto y quinto del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, es decir, "*Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente*" y "*Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio*", basándose en que los declarantes señalan trabajar en la empresa reclamante en el juicio, recibir órdenes directas de gerencia y una remuneración de parte de aquella, por lo que se configuraría los requisitos de dependencia, subordinación, habitualidad en la prestación de los servicios y retribución, razón por la que quedaría en evidencia que les falta la imparcialidad exigida por el legislador.

Que la reclamante, por su lado, señala que en virtud de las circunstancias especiales del presente juicio y la necesidad de presentar todos los medios de prueba necesarios para acreditar sus alegaciones, solicita se tenga en consideración a los testigos como base para una presunción judicial.

SEGUNDO: Que la tacha del artículo 358 N° 5 será acogida, ya que los declarantes reconocieron abiertamente que prestan servicios remunerados para la sociedad reclamante, uno desde el año 2017 y el otro por ya cuarenta y tres años, con lo cual se configura el presupuesto establecido en la norma que sirve de sostén a la inhabilidad invocada, cual es que entre los testigos y la parte que los presenta exista un vínculo jurídico de naturaleza laboral, que se entiende los priva de imparcialidad y objetividad para ilustrar al Tribunal acerca de los hechos de la contienda.

Por tanto, los testimonios no serán considerados.

La causal del N° 4 se estima no concurre, por ser laboral el vínculo –de subordinación y dependencia- entre los deponentes y la parte que los trae.

II.EN CUANTO AL FONDO.



«RIT»

Foja: 1

TERCERO: Que la parte reclamante, con el fin de acreditar sus asertos, rindió la siguiente prueba:

Folios 1 y 68.

1. Copia de resolución exenta N° 455, de fecha 22 de enero de 2020, emitida por la Seremi Metropolitana de Salud. Se señala que con fecha 13 de febrero de 2019, funcionarios fiscalizadores del Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, realizaron una visita inspectiva en la industria metalúrgica ubicada en Los Yacimientos N° 561, comuna de Maipú, de propiedad de Patricio Lioi y Cía. Limitada, constatando la existencia de un accidente laboral fatal que afectó a Carlos Enrique Díaz Muñoz, dependiente de la empresa contratista Ismael Antonio Díaz Muñoz. Dicho accidente ocurrió a las 16:30 horas, aproximadamente, en circunstancias que los trabajadores de la contratista se suben al techo del galpón para desarmar una escala y ventilador eólico, disponiendo placas sobre el techo como superficie de trabajo. En esos momentos el trabajador accidentado -que se encontraba en el nivel de piso- sube a la cubierta y al descender de ésta pisa fuera de la placa, en un pizarreño de la cubierta, cayendo al piso desde una altura aproximada de 4,50 mts. Tras el accidente es auxiliado por el paramédico de la empresa, quien le practica reanimación, constatando que el trabajador no cuenta con signos vitales, falleciendo en el lugar. La empresa mandante auto-suspendió la tarea de desarme de escalera y extractor eólico ubicado en la techumbre del galpón de la ex Planta Cromados y la empresa empleadora notificó la ocurrencia del accidente de forma inmediata, acatando lo establecido en la Resolución Exenta N° 156/18 del Ministerio del Trabajo. Asimismo, indicaron los funcionarios fiscalizadores que por medio del acta de inspección se ratificó la medida de auto-suspensión de la tarea antes señalada.

A partir de la investigación realizada se detectaron las siguientes deficiencias en seguridad industrial al momento del accidente: i) no se efectuó el análisis de trabajo seguro de la tarea ejecutada al momento del accidente, verificando las condiciones del lugar de trabajo a intervenir, medidas de seguridad necesarias para ejecutarla en forma segura; ii) inexistencia de puntos de anclaje en el área de ejecución de la tarea el día del accidente, debido a que se exponía a riesgo de caída de altura; iii) falta de control por parte de las líneas de supervisión de ambas empresas de las labores asignadas al trabajador, puesto que de acuerdo a lo informado estos se encontraban solos al momento de ocurrir el accidente; iv) no contaban con un procedimiento de trabajo seguro específico para la tarea de desarme de galpón incluyendo labores a ejecutar en altura; v) no se



«RIT»

Foja: 1

acreditó examen de altura física del trabajador accidentado, que indicara que se encontraba apto para ejecutar trabajos en altura; vi) no cuenta con señalética de seguridad que indique riesgo de caída de altura, obligatoriedad de uso de elementos de protección personal anti caídas, en el área de escalera de acceso a la techumbre; vii) no cuenta con capacitación teórico práctico en el uso de sistema personal de detección de caídas (SPDC), según guía N° 3 del Instituto de Salud Pública; viii) no acreditó capacitación del trabajador fallecido en el procedimiento descrito en el punto N° 4; ix) trabajador fallecido no contaba con doble cola de vida para realizar el ascenso por la escalera de acceso a la techumbre; y, x) escalera vertical fija empleada para acceder a la techumbre no cuenta con jaula de seguridad para evitar el riesgo de caída de altura durante el ascenso.

Luego se indica que se requirió informe técnico al Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos, a efecto de que se refiriera técnicamente sobre los documentos y antecedentes acompañados a sus descargos por ambas sumariadas. Por medio de memorándum N° 345/2019, dicho Subdepartamento señaló que al día 21 de junio de 2019 la empresa no había subsanado las deficiencias constatadas con motivo del accidente de autos, pero que, posteriormente, con fecha 10 de julio de 2019, la empresa acreditó el cumplimiento del 100% de las deficiencias consignadas en el acta de fecha 13 de febrero de 2019, razón por la cual procedió decretar el alzamiento de las tareas de desarme de escalera y extractor eólico de la ex Planta Cromados por resolución firmada por la Seremi de Salud RM.

Posteriormente, en la parte considerativa, se indica: *“Que, analizadas debidamente las alegaciones efectuadas y los elementos de convicción allegados a este expediente esta Autoridad Sanitaria concluye que las sumariadas Patricio Lioi Y Cía. Limitada y empresa Ismael Antonio Díaz Muñoz, no lograron desvirtuar los cargos formulados para eximirse de la responsabilidad que les cabe en los hechos materia de este sumario, toda vez que aquellos fueron constatados y consignados en el acta por el funcionario fiscalizador en la visita inspectiva y constituyen infracción a la normativa sanitaria vigente, especialmente al D.S. N° 594/99, que establece el "Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo, todo lo cual lleva a determinar a esta Autoridad que en el momento del accidente de autos, ambas sumariadas se encontraban incumpliendo lo prescrito en dicha normativa.*

Que, apreciadas por esta Autoridad Sanitaria las deficiencias en materia de higiene y seguridad constatadas en visita inspectiva del 13 de febrero de 2019, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, permiten concluir que evidentemente



«RIT»

Foja: 1

aquellas deficiencias contribuyeron a que en el lugar de trabajo se dieran condiciones de inseguridad que desencadenaron en la ocurrencia del accidente de autos.

Que, de esta manera, cabe señalar que las subsanaciones que las sumariadas adopten después de producido el accidente y/o de efectuada la visita inspectiva, no las absuelve de la responsabilidad infraccional, por lo tanto, las referidas deficiencias sanitarias detectadas se tendrán por efectivas” (sic).

En parte resolutive: “1°. APLÍCASE a PATRICIO LIOI Y CIA LIMITADA, legalmente representada por doña MARÍA DEL PILAR LIOI COTERA, ambas ya individualizadas en autos, una multa de 400 U.T.M. (Cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales)”, luego: “2°. APLÍCASE a don ISMAEL ANTONIO DIAZ MUÑOZ, ya individualizado en autos, una multa de 300 U.T.M. (Trescientas Unidades Tributarias Mensuales)”.

2. Copia de resolución de multa N° 8415/19/3 de fecha 26 de febrero de 2019. Se señala que un funcionario cursó fiscalización a la reclamante el día 25 de febrero de 2019, en la que se constata que la citada empresa incurrió en la siguiente infracción: “No vigilar como empresa principal el cumplimiento que le corresponde a las empresas contratistas y subcontratistas, en cuanto a obligación de informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán, las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y los métodos de trabajo correctos y la entrega y uso correcto de los elementos y equipos de protección, según el siguiente detalle: empresa contratista Ismael Díaz Muñoz, realizaba mantención en techumbre de ex galpón de cromado a la hora del accidente. Trabajador fallecido producto de caída de unos 5 mts. Aproximadamente” (sic). Se señala, además, que por ello se infringieron las normas contenidas en el artículo 9 del D.S. N° 76 del 18 de enero de 2017, del Ministerio del Trabajo, en relación con el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, y los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo. Se resuelve aplicar una multa de 60 UTM.

3. Copia de registro de entrega de fecha 9 de octubre de 2018, a nombre de Carlos Díaz Muñoz.

4. Copia de Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de empresa Patricio Lioi y Cía. Ltda.

Folio 70.



«RIT»

Foja: 1

5. Copia de acta de notificación de requerimiento de documentación y citación, de fecha 19 de febrero de 2019, y notificación de inicio de procedimiento de fiscalización.

6. Copia de anexo de requerimiento de documentación para fiscalización de seguridad y salud en el trabajo por accidente del trabajo y acta de reunión folio 0120714.

7. Copia de dos misivas enviadas a la Dirección del Trabajo.

8. Copia de carta enviada a la Dirección del Trabajo, sobre reconsideración de multa según acta 8415/19/3.

9. Copia de certificado de movimiento de Tesorería General de la República, de fecha 18 de marzo de 2019, donde consta que Patricio Lioi y Cía. Ltda. pagó \$2.898.300.

10. Copia de impresión de pantalla de consulta pública de multas ejecutoriadas de la Dirección del Trabajo, en la que aparece que se pagó la multa 8415/19/003-1 por un monto de 60 UTM.

11. Copia de escritura pública de transacción, acuerdo reparatorio, renuncia de derechos, aceptación, finiquito y desistimiento, entre Romina Andrea Díaz Cabeza y otros, con Patricio Lioi y Compañía Limitada, con fecha 29 de abril de 2019, en relación a los mismos hechos.

CUARTO: Que la parte reclamada rindió prueba, consistente en copia del sumario sanitario llevado a cabo por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, expediente N° 726, del año 2016, seguido en contra de Patricio Lioi y Cía. Ltda. Contiene la Resolución Exenta N° 455 de 22 de enero de 2020, previamente reseñada.

QUINTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas, consistentes en instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia ley les atribuye, según su naturaleza.

Por tanto, los instrumentos públicos hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado, gozando de una verdadera presunción de autenticidad, tanto respecto del hecho de haber sido dados por las personas que comparecen, como –en su caso- de haber sido autorizados por la persona que actúa como ministro de



«RIT»

Foja: 1

fe pública. Además, los instrumentos públicos hacen plena fe en cuanto a su fecha.

SEXTO: Que, a partir de la prueba valorada, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

1. Que el trabajador Carlos Enrique Díaz Muñoz, prestaba servicios para Ismael Antonio Díaz Muñoz, que a su vez era contratista para la empresa principal Patricio Lioi y Cía. Ltda.

2. Que el día 13 de febrero de 2019, a las 16:30 hrs. aproximadamente, el sr. Díaz Muñoz sufrió un accidente laboral, cuando en conjunto con otros trabajadores de la contratista se sube al techo del galpón para desarmar una escala y ventilador eólico, disponiendo placas sobre el techo como superficie de trabajo. El trabajador accidentado, que se encontraba en el nivel de piso, sube a la cubierta y al descender de ésta pisa fuera de la placa, en un pizarreño de la cubierta, cayendo al piso desde una altura aproximada de 4,50 metros, fracturándose y muriendo en el lugar.

3. Que, en virtud del accidente, la Dirección del Trabajo fiscalizó a la empresa reclamante, y por constatarse la existencia de una infracción a la normativa del ramo, la sanciona con una multa de 60 UTM, mediante resolución de multa N° 8415/19/3 de fecha 26 de febrero de 2019.

4. Que a raíz del mismo accidente, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana cursa un sumario sanitario a la reclamante -expediente N° 726, del año 2016-, dictando la Resolución Exenta N° 455 de fecha 22 de enero de 2020, que aplica una multa a de 400 UTM.

SEPTIMO: Que, entrando al fondo del asunto, debe considerarse que las partes están de acuerdo en el derecho de invocar el principio non bis in ídem frente a la potestad sancionadora de la Administración, es decir, en términos prácticos, que no se tolere un doble castigo por un solo y mismo hecho jurídico.

En el caso particular, la reclamante refiere haber sido fiscalizada y sancionada dos veces, por autoridades distintas (la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud), en procesos investigativos separados, a raíz del accidente que terminó con la vida del trabajador Carlos Enrique Díaz Muñoz, ocurrido el 13 de febrero de 2019.

OCTAVO: Que después de analizar la documentación aportada, se concluye que la denuncia no tiene asidero. En efecto, si bien se trata de un mismo



«RIT»

Foja: 1

hecho (el accidente laboral), lo cierto es que cada órgano actuó conforme a su competencia específica, reprimiendo infracciones diferentes, sanitarias y laborales. Por tanto, por mucho que tengan un mismo origen, cada multa sanciona cuestiones independientes, consistentemente con sus fundamentos jurídicos.

No debe perderse de vista que el hecho es complejo, con varias aristas posibles, y que el artículo 184 del Código del Trabajo permite que distintos servicios estatales intervengan en la materia, principalmente cuando deben hacerlo. La norma señala: *“Corresponderá también a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el artículo 191, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las leyes que los rigen”*.

En suma, no se está sancionado dos veces el mismo hecho, sino que reprimiendo las distintas infracciones constatadas, conforme a su naturaleza específica y no acumulable.

NOVENO: Que, efectivamente, la Dirección del Trabajo cursó la multa por: *“No vigilar como empresa principal el cumplimiento que le corresponde a las empresas contratistas y subcontratistas, en cuanto a obligación de informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán, las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y los métodos de trabajo correctos y la entrega y uso correcto de los elementos y equipos de protección”*. Vale decir, se reprocha un incumplimiento al deber legal de supervigilar a la empresa contratista, respecto de las obligaciones laborales de seguridad y/o prevención para con sus trabajadores.

Por su parte, la autoridad sanitaria detectó deficiencias en seguridad industrial al momento del accidente, describiendo las siguientes: *“i) No se efectuó el análisis de trabajo seguro de la tarea ejecutada al momento del accidente, verificando las condiciones del lugar de trabajo a intervenir, medidas de seguridad necesarias para ejecutarla en forma segura; ii) Inexistencia de puntos de anclaje en el área de ejecución de la tarea el día del accidente, debido a que se exponía a riesgo de caída de altura; iii) Falta de control por parte de las líneas de supervisión de ambas empresas de las labores asignadas al trabajador, puesto que de acuerdo a lo informado estos se encontraban solos al momento de ocurrir el accidente; iv) No contaban con procedimiento de trabajo seguro específico para la tarea de desarme de galpón incluyendo labores a ejecutar en altura; v) No se acreditó examen de altura física del trabajador accidentado, que indicara que se encontraba apto para ejecutar trabajos en altura; vi) No cuenta con señalética de*



«RIT»

Foja: 1

seguridad que indique riesgo de caída de altura, obligatoriedad de uso de elementos de protección personal anti caídas, en el área de escalera de acceso a la techumbre; vii) No cuenta con capacitación teórico práctico en el uso de sistema personal de detección de caídas (SPDC), según guía N° 3 del Instituto de Salud Pública; viii) No acreditó capacitación del trabajador fallecido en el procedimiento descrito en el punto N°4; ix) Trabajador fallecido no contaba con doble cola de vida para realizar el ascenso por la escalera de acceso a la techumbre; x) Escalera vertical fija empleada para acceder a la techumbre no cuenta con jaula de seguridad para evitar el riesgo de caída de altura durante el ascenso". Es decir, constató una serie de infracciones a normas de higiene y seguridad, que debían observar tanto la reclamante -la mandante de la obra- como la contratista, que en los hechos ejecutaba la faena.

En cada caso se funda en disposiciones legales y reglamentarias diferentes, según la competencia de cada órgano.

Por tanto, se desestimaré el reclamo en dicho aspecto.

DECIMO: Que la misma suerte correrá la solicitud de rebaja, ya que los argumentos en que se funda, esto es, en ser el monto arbitrario y carente de razón y proporción, no son ciertos.

De la lectura de la Resolución Exenta N° 455 de fecha 22 de enero de 2020, se aprecia que consigna un completo relato de los acontecimientos, precisando las diversas infracciones constatadas por el fiscalizador. No debe olvidarse que tales hechos fueron debidamente comprobados en el sumario sanitario, a partir del acta suscrita, y que de acuerdo al artículo 166 del Código Sanitario: *"Bastará para dar por establecido la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla".*

Pues bien, el sumario y la resolución recurrida gozan de razonabilidad, porque se basan en hechos determinados y comprobados. Lo mismo que ocurre con la sanción, que se estima proporcional, por guardar relación con el bien jurídico que tutelan las disposiciones infringidas, y el resultado fatal del accidente, a lo que se debe agregar que su cuantía se enmarca dentro del rango que establece la ley.



«RIT»

Foja: 1

En efecto, la falta de cuidado manifiesta de la reclamante en aspectos de tanta relevancia y que le son exigibles, a la par que al empleador, ameritan una sanción superior.

Cabe destacar que la reclamante pudo aportar antecedentes concretos y pertinentes para cuestionar la proporcionalidad del castigo, sin que lo hiciera. Además, sus argumentos parecen muy generales y no consiguen persuadir al Tribunal en el sentido que se pretende, conforme se viene razonando.

Sobre lo último, la Excma. Corte Suprema ha dicho que: *“en lo que atañe a la determinación del monto de la multa impuesta, la recurrente no explica cuáles son las razones en que funda su alegación en el sentido de que ella no sería la que corresponde en atención a la infracción, pues debería haber sido menor. Sobre el particular, debe recordarse que esta Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que, en estas circunstancias, la única forma que el tribunal pueda revisar el monto de la sanción pecuniaria es que se invoque y acredite una infracción al principio de proporcionalidad, cuestión que tampoco ha sido motivo de la controversia ni ha sido denunciada en el arbitrio en análisis (CS Roles 21.090-20, 68.722-2016, 39.365-2017 por mencionar algunas)”*. (CS. Rol N° 90.749-2020).

Asimismo, que: *“(…) el principio de proporcionalidad es un valor básico que debe estar presente en todo sistema de sanciones administrativas, y supone una relación de equilibrio entre la conducta imputada y la sanción que se aplique, estando detrás de ello bienes jurídicos fundamentales, como son la igualdad ante la ley y el debido proceso”* (CS. Rol N° 47.380-2021).

Por tanto, valga la reiteración, la sanción impugnada no es excesiva, en tanto se funda en un procedimiento legalmente tramitado y en vulneraciones de gravedad, que significaron poner en riesgo a un trabajador no capacitado ni premunido de elementos de protección para desempeñarse en altura, terminando muerto en el mismo lugar, por lo que también se rechazará la petición de rebaja de la multa y, en consecuencia, se rechazará completamente la reclamación.

UNDECIMO: Que no se impondrá las costas a la parte reclamante, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil; 171 del Código Sanitario; y, 144, 170, 342, 358 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:



«RIT»

Foja: 1

- I. Que se acogen las tachas del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, opuestas en contra de los testigos presentados por la reclamante, Camilo Ignacio Ugarte Gómez y Alberto Luis Verdi Manetti.
- II. Que se rechaza la reclamación.
- III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-2560-2020

Dictada por don Matias Franulic Gomez, Juez Titular del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diez de Junio de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horacoficial.cl>